

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Lic. Quintín Sanry, contra el veredicto de la Legislatura del Estado, que lo declaró con lugar á formación de causa, suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones de Magistrado del Tribunal Superior, que desempeñaba legalmente.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal está de acuerdo con los RR. Miembros del II. Congreso, en que la Constitución del Estado se debe cumplir; pero con la limitación que espera no rechazarán dichos Señores, de que ni está en sus preceptos, ni los ejecutores de ellos en el modo de cumplirlos, contravengan á las estipulaciones del Pacto federal; porque en caso contrario, la Constitución de la República y las leyes que emanan de ella, son la ley Suprema de toda la Unión, y á estas y no á aquellas debe estarse según los arts. 41 y 126 de la misma Constitución.

En el caso presente, se ha contravenido á las estipulaciones del Pacto federal señaladas en el pedimento anterior núm. 256, y violado las garantías que ellas otorgan; el agraviado cumplió con el requisito establecido por el art. 42 de la ley orgánica de los arts. 101 y 102 de la Constitución para solicitar el amparo, y el que suscribe cumpliendo con el art. 99 de la misma ley, en la parte que le toca, no puede pedir sino lo que respetuosamente pido, esto es: que se conceda al C. Magistrado Quintín Sanry el amparo que solicita.

San Juan Bautista, 7 de Mayo de 1874.

—*Lic. Cordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Junio 6 de 1874.—*Gabriel Sosa*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Junio 5 de 1874.—
Vistos estos autos y en ellos el escrito que les dá origen, presentado en 13 de Abril último por el C. Lic. Quintín Sanry, en demanda de amparo contra el Soberano Congreso del Estado, con motivo de la providencia ó veredicto que este cuerpo erigido en Gran Jurado pronunció en su contra, declarándolo culpable y separándolo de la Magistratura que desempeña en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento de la denuncia del C. Francisco Ortoll, de un hecho anterior á la época en que el C. Sanry fué nombrado Magistrado; los documentos que con su ocurno acompaña y el que produjo en el término de prueba; el informe producido por la Legislatura constante á fojas 10, con relación al artículo de suspensión inmediato; el auto de 16 de Abril en que esta fué decretada, comunicándose desde luego al Soberano Congreso, y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia, por ser la autoridad encargada de poner en ejecución la providencia reclamada, la notable protesta que con este motivo acordó la H. Legislatura y consta acumulada á fojas 15, procedía del oficio en que se solicita su agregación á los autos; tenidos á la vista los pedimentos fiscales, el último alegato del actor, y cuanto mas consta de autos y ver convino, el Tribunal pasando á fallar definitivamente, se propone los siguientes considerandos:

Primero: es punto constante de lo alegado y probado, que el hecho denunciado por el C. Francisco Ortoll á la Legislatura, y sobre el cual recayó el veredicto que dió ocasión al amparo, fué ejecutado por el C. Quintín Sanry, antes de entrar en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Segundo: el art. 61 de la Constitución del Estado, dice: Los Diputados á la Legislatura, el Gobernador del Estado, los individuos del Tribunal Superior de Justicia y el

Secretario general de Gobierno, son responsables de los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo. El art. 62 expresa: si el delito fuere común, la Legislatura erigida en Gran Jurado, declarará á mayoría absoluta de votos, si ha ó no lugar á proceder contra el acusado.

Tercero: conviniendo los textos terminantes de estos dos artículos, se ve con toda evidencia que la Legislatura al someter á su juicio al C. Magistrado Sanry, por un hecho anterior á su ingreso en este puesto, ha obrado con notoria incompetencia y que por tanto, favorece al reclamante el art. 16 de la Constitución Nacional, en cuanto dice: que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente.

Cuarto: Lo favorece igualmente, el último concepto del propio miembro del citado art. 16, el cual exige: que en el mandamiento escrito se funde y motive la causa legal del procedimiento. El veredicto de la Legislatura según es de ver en el certificado de fojas 20, no solo no expresa fundamento alguno del juicio condenatorio contra el C. Sanry, pero ni aun consigna que el acuerdo haya sido aprobado por los dos tercios de los diputados presentes, como debería haberlo hecho, atento á que la validez del acto dependía de esta circunstancia, según lo que terminantemente establece la fracción 16, art. 35 de la Constitución del Estado.

Quinto: En la protesta citada, la Legislatura reconoce paladinamente que ha obrado respecto de Sanry fuera del caso que los arts. 61 y 62 de la Constitución local, sugetan á su conocimiento; pero pretende autorizarse en la práctica constante del Congreso federal que ha hecho extensivo el fuero constitucional á los delitos comunes, anteriores al encargo de los funcionarios aforados, y cita en comprobación de esta supuesta práctica constante, los casos del General D. Benigno Canto y del Diputado D.

Marcos Andrade, que el Congreso quiere suponer en idénticas circunstancias, y tratado por el de la Unión de igual manera que el de el Lic. Sanry. Lo primero que ocurre contra esta alegación, es que no existe la práctica constante que la Legislatura del Estado atribuye al Congreso de la Unión, pues los casos que cita no han pasado como ella pretende. El Sr. Canto cometió el asesinato de Patoni; siendo ya diputado: el Sr. Andrade nunca fué juzgado por el Congreso Nacional; lo segundo, que aun suponiendo ciertas estas decisiones, ellas envolverían otras tantas infracciones de los arts. 103 y 104 de la Constitución general, y no es posible, mucho menos en materia de derecho constitucional, admitir la doctrina de que el desconocimiento de la ley de parte de una autoridad, por muy caracterizada que sea, legalice el mismo procedimiento de parte de otra.

Sexto: el texto constitucional tanto de la Nación como del Estado, que establece el juicio de desafuero por delitos comunes, limitándolo á los cometidos durante el tiempo del encargo, no es susceptible de interpretación alguna, porque su tenor está exento de toda ambigüedad, mucho menos la admite extensiva á casos anteriores, porque esto sería dar á los Congresos una jurisdicción retroactiva, violándose así el último concepto del art. 14 de la Constitución Nacional que también ha invocado el quejoso en su favor.

Sétimo: aunque así mismo ha hecho mérito de la fracción 3ª art. 20, por haberle negado al Congreso el careo con el denunciante, el Tribunal cree no haber habido violación constitucional en este respecto, porque el Juez de la causa, que debería ser el de 1ª instancia, era á quien de obligación tocaba el otorgamiento de esta garantía, y no al Congreso que solo practicaba aclaraciones para determinar si había ó no lugar á formación de proceso.

Por estas breves consideraciones, y con fundamento de los arts. 16 y 14 fracción 1ª

art. 101 de la Constitución general, y 1º art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, el Tribunal falla:

Primero: La Justicia de la Unión ampara y protege al C. Lic. Quintin Sanry, contra el veredicto de la Legislatura, expedido en su contra el diez de Abril último.

Segundo: Sacadas las copias de estilo, elévense los autos á revision.

Así lo decretó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, y firma conmigo su Escribano que doy fé.—*L. Correa.*
—Ante mí,—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Junio 6 de 1874.—*Gabriel Sosa*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 7 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Lic. Quintin Sanry, contra el veredicto de la Legislatura del Estado que lo declaró con lugar á formación de causa, suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones de Magistrado del Tribunal Superior que desempeñaba legalmente; vistos el informe y protesta de la Legislatura; lo alegado por el quejoso; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando 1º: Que los juicios de amparo por su naturaleza misma y por disposición de la ley, estrictamente limitados á proteger las garantías del individuo, sin que ninguna especie de disposición de la autoridad, que no tenga precisamente el efecto de violar tales garantías, pueda dar lugar á este recurso. Que el solicitante señala la infracción de los arts. 14 y 16 de la Constitución federal, afirmando que los procedimientos de la Legislatura, que han terminado por la declaración de haber lugar á la formación de causa, son extra legales, por tratarse de delitos cometidos antes de su

elección para Magistrado, en tanto que la Constitución particular de Tabasco, previene que los miembros del Tribunal Superior de Justicia solo son responsables ante el Congreso, por delitos cometidos durante el desempeño de su encargo. Que de esta asercion plenamente probada, deduce el solicitante que la Legislatura da á su veredicto un efecto retroactivo, porque pretende aplicarlo á hechos acontecidos en una época puesta fuera del alcance de sus facultades constitucionales, en materia de responsabilidad de los Magistrados. Que no citando segun el solicitante, la molestia causada por la suspension que decretó la Legislatura, apoyada en mandamiento escrito de autoridad competente, puesto que el solo juez competente en el caso es el ordinario; envuelve esta parte del procedimiento, una violación del art. 16 de la Constitución federal.

2º: Que la retroactividad á que la Constitución se refiere en su art. 14, debe entenderse en el sentido de que perjudique á un individuo, lo cual no sucede en el presente caso, pues el efecto del veredicto de la Legislatura es previamente el que busca el solicitante, puesto que lo deja á disposición de los Tribunales comunes; que la molestia causada por la suspension no existe, si se atiende á que de otro modo no podría un Juez ordinario juzgar á un inferior. Que en consecuencia, el veredicto mencionado no infringe ninguna garantía constitucional.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Tabasco, que amparó al C. Lic. Quintin Sanry.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Iglesias.—Auza.—Gurza.—Lozano—Arteaga.—Ramírez.—Castañeda.—Guzman.—Zavala.—García.—E. Landa,* secretario.

Es copia. México, Agosto 18 de 1874.
Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por el C. Rafael Carrera, en representación de los Síndicos del concurso de Díaz y Hermano del comercio de Cuautitlan, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que los acreedores del concurso Díaz y Hermano, formado en el Juzgado de 1ª instancia de Cuautitlan, por conducto de su síndico, solicitan el amparo de garantías contra la sentencia ejecutoria pronunciada por la 1ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado el 17 de Abril último, sobre el incidente de calificación de la quiebra, para que respecto de él se proceda con arreglo al Código de comercio de 16 de Mayo de 1854, y cuyo mandato judicial importa la violación de las garantías consignadas en el artículo 18 de la Constitución federal.

El acto reclamado, en pocas palabras puede reducirse á estos términos: El Juez de 1ª instancia del concurso, en la incidencia criminal sobre el fraude de los fallidos, decretó: que para juzgarlos se arreglara al Código de comercio ya citado; pero despues comprendió que de seguir así el procedimiento, juzgaba con una ley privativa, y en el caso, su primera determinación la revocó por contrario imperio.

Esta providencia judicial vino al Supe-

rior en apelación, y en la última instancia fué revocada, declarando la Sala de súplica que el Juez inferior, en la incidencia mencionada, debe sujetar su procedimiento al código de comercio de 1854, y cuya declaración envuelve la idea de que no juzga ni decide con arreglo á una ley privativa.

El que habla, comprende que la cuestión que nos ha traído el síndico del concurso de la sociedad Díaz y Hermano, entraña dificultades que se hallan sobre de su inteligencia; y para resolverla en el punto á que está obligado, se permite fijar como punto de partida, el sentido de lo que pueda entenderse por ley privativa. Para el caso que nos ocupa, puede entenderse por ley privativa, la que establece cierto privilegio ó escepcion para cierta clase de la sociedad, en el procedimiento de los negocios que surjan del ejercicio que la ley fundamental les concede como un derecho otorgado á todo hombre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que mas le acomode.

El Código de 54 que el poder legislativo del Estado declaró vigente en el ramo mercantil, en lo que no se oponga á la Constitución general y particular del Estado, preceptúa entre otras varias cosas, que los comerciantes, para reputarse como tales, deben de matricularse, con otras preyecciones referentes á la parte civil administrativa que caracteriza, muy especialmente, la escepcion que hizo aquella ley de esa gran parte de individuos que forman la sociedad mexicana. A esas personas se deben juzgar con arreglo á aquella misma ley, cuando se encuentren en los casos de la responsabilidad criminal que ella establece, segregándose así de la generalidad de la gran masa social, puesto que la ley de 54 establece un procedimiento especial que sale de la esfera del orden comun.

Se palpa con mas claridad la prerrogativa de los comerciantes de que habla el Código de 54, cuando suponiéndose el caso de quiebra fraudulenta de uno de estos comerciantes, con la que verifique un indus-